

El Parlamento reabre la comisión de cajas tras tres años sin previsión de investigar más

- ▶ La mayoría del PPdeG aprueba la reactivación para "acabar los trabajos realizados"
- ▶ La oposición arremete contra el retraso y exige nuevas comparecencias e información

JULIO PÉREZ ■ Vigo

La comisión del Parlamento de Galicia para investigar la desaparición de las dos cajas de ahorros necesitó tres años para resucitar. Cuatro exactos si tomamos como referencia el debate en O Hórreo del que salió por unanimidad su creación. Y lo suyo no es precisamente un milagro. Es una necesidad. El portavoz del PPdeG reconocía ayer que el propio cambio de legislatura certificó el fallecimiento del proceso y que la propuesta de su partido para abrir una nueva comisión con las mismas funciones busca completar lo hecho hasta ahora. Redactar "unas conclusiones razonables". La insistencia de Pedro Puy en que lo que toca es "acabar los trabajos" cierra la puerta a ampliar las comparecencias y pedir nueva información, pese a que los populares asumen que en estos tres años han pasado muchas cosas alrededor del sistema financiero gallego. Era lo que quería la oposición. PSdeG y BNG presentaban su propia solicitud de una nueva comisión para incluir también el estudio de la venta de la



Xoán Álvarez

PEDRO PUY
■ Portavoz PPdeG

"Había que enfriar el debate para relanzar Abanca"



X. Álvarez

ABEL LOSADA
■ Diputado PSdeG

"Por la prisa no dejaron que viniera Fernández Ordóñez"



X. Álvarez

ANTÓN SÁNCHEZ
■ Diputado En Marea

"Manejaron la comisión a su antojo y por electoralismo"



X. Álvarez

ANA PONTÓN
■ Portavoz BNG

"La realidad es que no quieren investigar nada"

antigua NCG. Pero la que prosperó con la mayoría del PPdeG fue la suya y Puy dejó entrever que lo único a mayores de lo previsto será "algún análisis" de la subasta y las sentencias por las indemnizaciones a los antiguos directivos.

Para sorpresa, y cabreo, del resto de grupos, el portavoz del PPdeG en la Cámara gallega admitió que la parálisis de la comisión durante estos tres años fue una decisión que él

mismo tomó a propósito. "De las pocas cosas que el presidente Feijóo me recriminó", asegura. Lo hizo como "favor al país" al "enfriar el debate" y "no interferir" en el relanzamiento comercial de Abanca; y para "evitar el ridículo" de sacar conclusiones que pudieran chocar con el fallo de la Audiencia Nacional y el recurso ante el Supremo de las prejubilaciones. Ante los reproches en tromba de la oposición -"La de-

mocracia Puyana", le afeó Ana Pontón, del BNG-, Pedro Puy defendió el "compromiso absoluto con la transparencia" de los populares con este caso y enfatizó que solo la Xunta remitió documentación. "Sigo pensando que es una pena que se perdieran las cajas, pero gracias a la gestión de este partido el negocio no fue tan mal", asegura.

Pontón le echó en cara todas las veces que él y otros diputados ne-

garon la parálisis en la investigación. "La realidad es que no tienen ningún interés en hacerlo", afirma el portavoz del BNG, que exige "responsabilidades políticas" porque las indemnizaciones a los directivos "se fraguaron en el extra de tiempo que pactaron PP y PSOE". El Bloque carga con la privatización del negocio de las antiguas cajas. "Desde 2014 la entidad ganó 1.700 millones y se vendió por 1.000", subraya. "El señor Feijóo -añade Pontón- es cómplice de esta estafa a todos los gallegos".

Desde las filas socialistas recordaron al PPdeG su negativa en el verano de 2013 a aplazar un mes la comparencia en persona del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, porque "había prisa". Han pasado tres años", ironizó Abel Losada, que avanza que su partido pedirá que venga al Parlamento gallego su sustituto, Luis María Linde, y la exsecretaria de Estado de Presupuestos y exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, artífice de la "fallida fusión" y "que se escudó en que era alto cargo para no venir". "Ahora puede", advirtió el diputado socialista.

"Ustedes manejaron a su antojo y por interés electoral una comisión que era para esclarecer la verdad y que convirtieron en un auténtico paripé", recriminó también Antón Sánchez, de En Marea, que suma a las tareas pendientes el estudio del cuaderno de venta de NCG y la actual gestión de Abanca "de descapitalización de la entidad para hacer negocio rápido".

¿Dónde está la orden de la falsa "due diligence"?

"Tengo información, a lo mejor sesgada, de que la documentación sobre la no auditoría de KPMG está incompleta", lanzó Abel Losada, del PSdeG. Antón Sánchez recogió el guante. "El índice señala que la página 4 es la carta de encargo. Y no aparece", confirmó el diputado de En Marea. No hubo respuesta.

Los dos diputados se referían a la famosa "due diligence", en palabras de la entonces conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, por la que la Xunta pagó un millón de euros para supuestamente avarar que la integración de Caixanova y Caixa Galicia era viable. Lo cierto, como luego demostró FARO con la publicación en exclusiva del contenido del informe antes de la apertura de la comisión, es que se trataba de un "diagnóstico acelerado" sobre la operación, que, como también confirmaron los autores, ni buscaba los pros y los contras de la fusión ni analizaba alternativas posibles. Que pedía que fuera Caixanova la que absorbiera Caixa Galicia por su peor situación. Y que era necesaria la emisión de otros 300 millones de euros en preferentes para garantizar la devolución de las ayudas al FROB. Ninguno de los responsables de la Xunta que pasó por la comisión explicó con claridad cuál fue el motivo real del contrato y lo que reflejaba esa carta de encargo.

Tres de cada cuatro pymes españolas tiene dificultades para financiarse

Tres de cada cuatro pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas tiene dificultades para financiarse. Es una de las principales conclusiones del III Informe sobre la financiación de la pyme en España, liderado por la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR-CESGAR), que integran 20 entidades de este tipo en España, entre ellas Sogarpo.

Y es que, la exigencia de más requisitos (garantías y costes asociados a las operaciones) ha empeorado el acceso al crédito de las pymes en la segunda mitad de 2016. El Informe, presentado por José Rolando Álvarez, detalla que el 41,7% de las compañías que han buscado financiación en este semestre ha tenido que presentar garantías para lograrla.

Perspectivas a corto plazo

En este momento, cae en más de seis puntos el número de negocios que confía en aumentar su facturación a un año vista hasta el 40%. El Informe también apunta una reducción significativa de la

» El 15,5 % de las empresas que busca crédito creará 325.000 empleos en los próximos tres años si logra obtenerlo



José Rolando Álvarez, presidente de SGR-CESGAR, y Jesús Fernández, vicepresidente, durante la presentación del Informe.

demanda de financiación, ya que el 20,7% la ha requerido, la haya buscado de manera activa o no, mientras que en marzo la necesitaban tres de cada diez.

Con respecto al destino de la financiación, la mayoría de las necesidades se siguen vinculando al circulante (74,9% de las empresas), pero este motivo ha perdido peso por un menor nivel de acti-

vidad. Por su parte, las operaciones de inversión crecen, ya que algunas pymes han decidido no posponer por más tiempo su decisión de crecer.

El Informe asegura que se ha reducido de forma significativa la demanda de financiación bancaria entre las pymes, aunque los bancos son los principales prescriptores (84%).

Por otra parte, apunta que se ha elevado el porcentaje de firmas con necesidades de financiación a las que se ha requerido presentar garantías o avales hasta el 47,9%. Esto demuestra la relevancia del sistema nacional de garantías, compuesto por las sociedades y la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), ya que, pese a caer la actividad, se mantiene estable la necesidad de garantías, en torno al 9%.

El empleo

El 15,5% de las pymes españolas que buscan financiación, unas 116.654, crearía empleo si llegara a obtenerla, y de esta manera se podrían crear unos 325.117 puestos de trabajo en los próximos tres años. Otro 44,3% -unas 333.000 unidades empresariales- considera que obtenerla será clave para mantener el empleo.

Sistema Nacional de Garantías

Las SGR aportan múltiples beneficios a las pyme y autónomos, entre los que se encuentran la obtención de mayores importes y el abaratamiento de costes en la financiación bancaria, el asesoramiento y la ampliación de plazos de devolución. A 30 de septiembre, las SGR han formalizado 13.000 operaciones por 807 millones de euros.